

Autor 1: Lic. Zunino Esteban

DNI: 28408346

Mail: estebanzunino@hotmail.com

Institución: Conicet, UNQ, UBA

Autor 2: Dra. Aruguete Natalia

DNI: 24270532

Mail: nataliaaruguete@gmail.com

Institución: CONICET, UNQ.

Título: EL USO MEDIÁTICO DE LAS FUENTES DE LA INFORMACIÓN: UN ESTUDIO DE CASO

Área de interés: Prácticas de producción, consumo y usos mediáticos.

Palabras clave: Fuentes; Resolución 125, *Clarín*.

Resumen:

Es objeto del presente trabajo analizar la relación que mantuvo el matutino argentino Clarín con sus fuentes de información en la cobertura mediática del conflicto que en 2008 enfrentó al gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner y al sector agropecuario. El mismo se desató luego de la implementación de la Resolución N° 125/08. Dicha norma del Poder Ejecutivo, a la vez que elevaba las alícuotas que debían tributar las exportaciones del agro, ataba los gravámenes a la evolución de los precios de los commodities en el mercado internacional.

Numerosos estudios sobre la utilización de las fuentes de información han concluido que la palabra oficial suele prevalecer por sobre otras perspectivas. Al ceder el monopolio noticioso a los funcionarios públicos, los medios restringen la diversidad de ideas, garantizando el “clima de negocios” en el que operan.

El caso que aquí se estudia mostró un comportamiento diferente. En la cobertura mediática del conflicto “campo – gobierno” no predominaron las fuentes provenientes del ámbito estatal. Sin embargo, la creciente participación de voces no oficiales no se correspondió con una mayor democratización en el acceso de los actores a las páginas del diario Clarín. En efecto, las fuentes que dominaron su cobertura pertenecían a las organizaciones del sector agrario que históricamente detentaron un significativo poder en su capacidad de influir tanto en las decisiones políticas de los gobiernos, como en los medios de comunicación del país.

1. Introducción

Al cubrir los asuntos políticos, los medios de comunicación mantienen una doble relación con el espacio público. Por un lado, recrean y transmiten conocimientos compartidos por la sociedad. Por otro, recurren a los actores de los acontecimientos como sus fuentes de información. Entre medios, fuentes y público se da una triangulación básica, ya que las fuentes dependen del espacio que obtienen en las agendas informativas para difundir sus acciones y son, al mismo tiempo, un insumo fundamental del proceso de producción de las noticias. Mientras que las audiencias necesitan de la información que proveen las fuentes para conocer distintas versiones de lo que sucede (Martini, 2000).

En esta tensa relación se pone en evidencia la correlación de fuerzas entre actores que tratan de imponer su visión de los hechos. Como resultado de tal disputa, la palabra oficial suele prevalecer por sobre otras perspectivas y experiencias, limitando la diversidad de ideas (Bennett, 1990). En efecto, los periodistas acuden a las fuentes oficiales¹ por el factor de autoridad que detentan.

Sin embargo, el caso que aquí se estudia mostró un comportamiento diferente. En la cobertura mediática del conflicto que en 2008 enfrentó al gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner y al sector agropecuario, no predominaron las fuentes provenientes del ámbito estatal.

En marzo de 2008, el gobierno argentino anunció la implementación de la Resolución N° 125, que fijaba un nuevo esquema de retenciones a las exportaciones de algunos productos primarios, con el objeto de capturar parte de la renta extraordinaria de la producción agraria. La iniciativa generó la reacción inmediata de las entidades más representativas y poderosas del agro, que confluyeron en un espacio autodenominado “Mesa de Enlace”. Desde allí impulsaron las principales medidas de lucha, como los cortes de ruta y el cese en la comercialización de granos y hacienda.

Según el análisis del tratamiento noticioso hecho por *Clarín* a lo largo de los 128 días que duró el conflicto, no predominaron las voces de los funcionarios públicos. Por el contrario, la incidencia de los actores e instituciones externas a los poderes del Estado fue mayor al 60%.

¹ En este trabajo se utiliza la definición de fuentes oficiales que da Steel (1997), en referencia a aquellos funcionarios o instituciones pertenecientes al ámbito estatal o gubernamental.

Pero la creciente participación de voces no oficiales no supuso una mayor democratización en el acceso de los actores a las páginas del diario *Clarín*. En efecto, las fuentes que dominaron su cobertura pertenecían a las organizaciones del sector agrario, que históricamente detentaron un significativo poder en su capacidad de influir en las decisiones políticas de gobiernos democráticos y dictatoriales por igual. Más aún si se considera que, en la actualidad, este agente se ha redimensionado, a partir de la convergencia de grandes propietarios, tomadores de tierra y capital financiero (Giarraca, 2010).

El objetivo de analizar la relación que *Clarín* estableció con sus fuentes de información se basa en dos motivaciones. Por un lado, explorar la capacidad de los distintos actores de acceder a las páginas de este matutino, en función de su encuadre institucional, de su cercanía al poder y de su posicionamiento frente a la política de retenciones. Por otro lado, vislumbrar si el tipo de tratamiento que el periódico hizo de sus fuentes fue coherente con el enfrentamiento desatado entre el Grupo Clarín y el gobierno de Cristina Kirchner, en el marco de este conflicto.

La elección de este periódico resulta elocuente. No sólo porque se convirtió en el conglomerado mediático más importante de la Argentina, producto de la ausencia de restricciones al proceso de concentración que se dio en el sector infocomunicacional desde comienzos de la década de 1990 hasta la actualidad (Becerra y Mastrini, 2009). Si no, además, por los intereses directos que el multimédios tiene en el sector agrario. Junto con el diario *La Nación*, controla desde 2007 el 50% de Expoagro, la muestra agropecuaria a campo abierto más grande del país, que presenta en sus *stands* a productores argentinos y extranjeros de semillas, agroquímicos y otros insumos para el campo (Giarraca y Teubal, 2010).

2. Medios y fuentes de información. La teoría del Indexing

Las fuentes de información, materia prima de las noticias, son actores que suministran datos en su calidad de integrantes de grupos o sectores con algún grado de interés en el asunto, aún cuando parezcan remotamente alejados de éste. Pero el real acceso de las fuentes a las agendas mediáticas depende del tipo de actores de que se trate, de su nivel político, sociocultural y económico, y de su cercanía al poder oficial (McQuail, 1998).

Entre fuentes, medios y audiencias no se da un vínculo simple y lineal, sino una relación espinosa en la que se pone en juego la capacidad de imponer el encuadre desde el que se interpretan los hechos que se incluyen en la agenda. En esta tensa convivencia, los periodistas suelen transmitir la información provista por las agencias gubernamentales en forma casi literal,

dado que éstas exhiben un factor de autoridad que les otorga mayor verosimilitud (VanSlyke Turk, 1986; Wolf, 1991). Con lo que la versión oficial de los hechos se impone por sobre otros puntos de vista y experiencias.

Cuando las coberturas se abocan a asuntos políticos suelen poner el foco en las acciones y reacciones del gobierno frente a otras instituciones con ideas diferentes y, a veces, radicalmente opuestas. En estos escenarios, los periodistas recurren a actores situados en posiciones de autoridad.

En su estudio sobre la relación entre los medios y sus fuentes de información, Bennett (1990) acuñó el término *Indexing*, para referirse al índice que los profesionales de la información atribuyen a la gama de voces y puntos de vista. Esta estructuración de temas y fuentes, señala el autor, suele ser absorbida por la visión dominante de los gobiernos acerca de un asunto determinado (Bennett, 1996). Así, la industria noticiosa cede a las instituciones oficiales el rol de vigilarse a sí mismas, vulnerando el equilibrio democrático (Bennett, 1990).

Al ceder el monopolio noticioso a los funcionarios públicos, producto de las relaciones “transaccionales” y “simbióticas” que forjan con ellos, los medios restringen la diversidad de ideas, garantizando el “clima de negocios” en el que operan (Bagdikian, 1985).

Y aun en aquellas ocasiones en las que se abre el espectro y se introducen nuevas perspectivas, estas desviaciones respecto de la postura oficial no adquieren mayor importancia (Crouse, 1973; Gitlin, 1980; Tuchman, 1978). Son incluidas ocasionalmente, en reportes sobre infracciones, situaciones de violencia o comportamientos desacreditados que rápidamente se desvanecen y quedan fuera de la agenda, mediante coberturas superficiales, con un tratamiento personalizado, dramatizado y fragmentado, en desmedro de un abordaje que exponga críticas hacia políticas específicas (Bennett, 1983).

Esta limitación del registro de voces no surge de una censura declarada sino de las propias rutinas periodísticas, donde se decide el ámbito de las fuentes informativas positivas, legítimas y creíbles.

¿A qué llamamos fuentes oficiales? Bennett entiende que las instituciones oficiales no son sólo las gubernamentales, sino que incluye a otros actores con capacidad de incidir en el curso de los acontecimientos. Sin embargo, aquí se utiliza la definición de Steel (1997), quien denomina como tales a los funcionarios o instituciones pertenecientes al ámbito estatal o gubernamental.

Coherente con esta postura, Hallin, Manoff y Weddle (1993) diferencian entre fuentes estatales (*statist sources*) y fuentes civiles (*civil sources*).

Ahora bien, la referencia a distintos tipos de fuentes depende del fenómeno analizado y de la coyuntura en que éste se inserta. Cuando se abordan temas polémicos, donde existe un debate con posturas diferentes, más fuentes son consultadas y más importancia se les da en los medios.

Ejemplo de este tipo de escenarios son las controversias políticas, donde las fuentes oficiales corren el riesgo de perder credibilidad, producto de la polémica en la que están inmersas. En tales circunstancias, la convocatoria de actores informales o extraoficiales es mayor, aunque su tratamiento no cuenta con pautas tan claras.

Pero qué sucede cuando la polémica se da en un ámbito donde las fuentes no oficiales detentan un poder significativo, al punto de poner en riesgo la propia gobernabilidad. Esta pregunta es clave frente al fenómeno que aquí se analiza, ya que las agrupaciones del agro tuvieron históricamente la capacidad de influir en las decisiones políticas de los gobiernos argentinos.

Coherente con esta inquietud, la decisión de circunscribir las fuentes oficiales al ámbito estatal responde al objetivo de analizar la correlación de fuerzas entre un gobierno nacional que quiso impulsar una política pública y un sector con un alto poder de veto, que se enfrentó a la iniciativa al ver afectado sus intereses económicos y terminó ganando la pulseada.

3. La Resolución 125

La implementación de la Resolución N° 125, anunciada el 11 de marzo de 2008 por el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, fijaba un nuevo esquema de retenciones a las exportaciones de algunos productos primarios. El impuesto sobre el monto total de lo exportado para la soja aumentaría del 35 al 44%, y para el girasol, del 32,1 al 39,1%. Mientras que el gravamen para el maíz y el trigo se reduciría en un 1%. Paralelamente, se procuraba aplicar un esquema móvil que ligara la evolución de estos impuestos a la cotización de los granos en el mercado internacional.

El gobierno de Cristina Kirchner perseguía tres objetivos. Por un lado, capturar parte de la renta extraordinaria del agro pampeano², que se generaba no sólo por la alta cotización de los *comodities*, sino por la llamada “renta diferencial internacional”, producto de las ventajas que dan la calidad de los suelos y el clima argentino (Flichman, 1977). Por otro, cortar la relación

² El término “agro pampeano” hace referencia a los sectores agropecuarios de las provincias pampeanas y litoraleñas: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, y sur de Corrientes (Barsky y Gelman, 2009).

entre la evolución de los precios internacionales y los precios del mercado interno. Finalmente, detener la extensión de la soja como monocultivo en una creciente área del país.

Frente a esta medida, las entidades más representativas del sector reaccionaron inmediatamente. La Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y la Federación Agraria Argentina (FAA) confluyeron en la Mesa de Enlace, desde la cual enfrentaron la norma, con cortes de ruta en todo el país y el cese de la comercialización de granos y hacienda.

El gobierno modificó la Resolución N° 125 después de arduas negociaciones con estas entidades, pero no pudo llegar a acuerdos sustanciales. Tal fue la presión ejercida por la Mesa de Enlace mediante diversas estrategias que la norma finalmente fue girada al Congreso Nacional para su tratamiento. Tras su ratificación en una votación reñida en la Cámara de Diputados, fue derogada por el Senado de la Nación el 17 de julio.

Lo inédito del enfrentamiento desatado en torno a la implementación de este esquema de retenciones es la cohesión que alcanzaron organizaciones tradicionales del campo, como la SRA y el CRA, con otras como la FAA y CONINAGRO, que históricamente representaron intereses diferentes y, en ocasiones, hasta contrapuestos (Basualdo y Arceo, 2009).

3.1. El poder del campo

El gran poder económico y político que adquirió el sector agrario radica en que, excepto en períodos históricos precisos, la Argentina siempre tuvo un perfil predominantemente agroexportador. En este contexto, el desigual reparto de la tierra en favor de un núcleo concentrado de familias tradicionales es un dato clave en la estructura agraria nacional.

A mediados del siglo XIX, en épocas de consolidación del territorio argentino, el Estado vendió tierras vírgenes a bajo precio. Los primeros terratenientes vinculados al poder desarrollaron la ganadería y una incipiente agricultura, actividades que serían el motor del modelo agroexportador hasta la crisis del '30. Creada en 1866, la Sociedad Rural mantuvo estrechos vínculos con el poder del Estado. Su influencia en la política nacional se convirtió en una constante (Barsky y Gelman, 2009).

Pero el sector agrario no estuvo exento de conflictos internos. A principios del siglo XX se produjo una prolongada crisis entre arrendatarios y propietarios de tierras. Las protestas por la baja en el costo de los arrendamientos derivaron en la creación de Federación Agraria Argentina, que desde ese momento nuclea a los pequeños y medianos productores agropecuarios.

Nacida en 1943, Confederaciones Rurales Argentinas representa a los criadores de ganado, sector subordinado a las decisiones de la oligarquía tradicional (Murmis y Portantiero, 1986), a diferencia de la SRA que agrupaba a los grandes terratenientes ligados al frigorífico y a la actividad de invernada. En estas dos agrupaciones confluyen las familias dueñas de las mayores extensiones y mejores tierras del territorio nacional. El rechazo de ambas entidades a todo tipo de intervencionismo estatal en los mercados las ha unido en más de una oportunidad. Finalmente, en 1956 se constituyó la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada, que agrupa a los sectores cooperativistas del agro nacional, principalmente dedicados a la lechería y el tambo.

En la década del '70, con la irrupción de la dictadura más sangrienta de la historia argentina (1976-1983), se impuso en toda la región un modelo de acumulación del capital basado en la valorización financiera. Con el gobierno militar en el poder —cuyo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, era el entonces presidente de la SRA— se eliminaron las retenciones y se produjo la reducción de ganado vacuno más profunda de la historia. Sin embargo, tal ruptura del ciclo ganadero no generó reacción alguna entre las asociaciones más poderosas de agro pampeano, SRA y CRA. En efecto, la oligarquía terrateniente, representada por estas entidades, buscó la reproducción del capital en el sector financiero, diversificando sus inversiones y quitando recursos a la producción (Basualdo y Arceo, 2009).

Con la consolidación del modelo neoliberal de valorización financiera en la década del '90, se produjo una inédita expansión de la producción agrícola, sustentada en la innovación tecnológica, la extensión de la superficie sembrada y la incorporación de la soja como cultivo preponderante. La brecha entre la rentabilidad de los grandes productores y la de los pequeños y medianos se incrementó con la aparición de nuevos actores: los *pools* de siembra y los fondos de inversión agrícola (Giarracca y Teubal, 2010).

Después de la crisis argentina de 2001, la devaluación de la moneda nacional y la intervención estatal en políticas sociales y en la protección y fomento de algunos mercados, marcaron un quiebre económico e ideológico con respecto al paradigma neoliberal de los '90. El nuevo escenario económico nacional benefició principalmente a los sectores exportadores, entre los que se destaca el agropecuario. La pesificación de las deudas posterior a la devaluación alivió la situación del agro. Mientras que los compromisos adquiridos mantuvieron el valor nominal en pesos, los ingresos del sector agroexportador liquidados en dólares aumentaron por lo menos tres veces su valor relativo (Barsky y Gelman, 2009).

En este favorable contexto fue anunciada la Resolución N° 125, con la que el gobierno pretendió capturar una porción mayor de la renta agraria y redireccionarla hacia otros sectores, por intermedio de planes sociales y programas de educación, salud y empleo. Frente a la profunda crisis sufrida por el modelo de acumulación neoliberal, la disputa entre el “campo” y el gobierno en torno a la implementación de retenciones móviles pone en evidencia “la intención del agro pampeano de terciar en la disputa por la distribución del ingreso y, al mismo tiempo, subordinar a los asalariados y a la producción industrial a su propio proceso de acumulación de capital” (Basualdo y Arceo, 2009, p.75).

Concretamente, la presión ejercida por la “Mesa de Enlace” hizo que, finalmente, la norma fuera rechazada en el Senado, a partir del desempate del Vicepresidente Julio Cleto Cobos, quien se pronunció en contra de la iniciativa. El papel de Cobos fue central en este proceso, ya que se trata de un dirigente radical que integró la fórmula presidencial con Cristina Fernández en las elecciones de 2007, en el marco de la Concertación Plural que agrupó a varias fuerzas políticas. A partir de la votación contraria a la Resolución N° 125, Cobos se convirtió en uno de los principales dirigentes de la oposición, sin haber renunciado a su cargo hasta la fecha.

El desenlace de esta puja de poder resulta revelador, si se considera que este agente se ha redimensionado, a partir de convergencia de grandes propietarios, tomadores de tierras (*pooles* de siembra), capital financiero (Fondos de inversión) y servicios de terceros, como por ejemplo, los estudios agronómicos que sirven a esta nueva lógica de producción agropecuaria.

Este nuevo actor, que ostenta rasgos económicos, sociales y culturales propios y que mantiene una nueva relación con otras instituciones —entre otras, las universidades públicas y los medios de comunicación—, constituye el núcleo duro del “agronegocio sojero” (...), que creó sus propias exposiciones anuales de la mano de los principales matutinos porteños” (Giarraca, 2010, p. 324).

Un dato elocuente es que, durante 2008, de las veinte mayores exportadoras de Argentina, once se dedicaban directamente al agronegocio, y otras dos —Ford y Siderca— lo hacían colateralmente, como proveedoras de productos para “el campo”³. Ambas fueron patrocinadoras de Expoagro. Así, es posible inferir que, de las veinte compañías relevadas, trece tuvieron vinculación con el Grupo Clarín en Expoagro, al participar del evento como expositoras o

³ Ford produce una amplia gama de vehículos destinados al agro. Siderca (del Grupo Techint), a través de su controlada Ternuim, es proveedora de productos de acero para el agro.

patrocinadoras. (ver tabla 1, en donde aparecen destacadas en detalle cada una de estas empresas).

Por ello, en el marco de este estudio, es clave no soslayar el hecho de que la Resolución N° 125 afectó intereses concretos del grupo Clarín, por su vinculación con el “agronegocio”.

Tabla 1. Las empresas argentinas que más exportaron durante 2008 (dólares estadounidenses).

Orden	Empresa	Exportación
1	Bunge Argentina SA	4.137.884.997
2	Pan American Energy lic. Suc. Argentina	4.092.943.587
3	Idc Argentina SA	3.850.792.330
4	Minera Alumbrera Limited	3.114.242.882
5	YPF SA	2.090.755.136
6	Vicentin SAIC	1.902.865.595
7	Aceitera General Deheza	1.859.140.658
8	Nidera SA	1.337.031.706
9	Alfred C. Toepfer Internacional Argentina SRL	1.206.570.067
10	Esso Petrolera Argentina SRL	1.164.339.264
11	Compañía Mega SA	1.159.890.254
12	ADM Argentina SA	1.150.623.492
13	Refinería del Norte SA	1.107.950.598
14	Oleaginoso Moreno Hnos. SACIFIA (Glencore)	1.007.510.693
15	Siderca SAIC (tenaris - ternium)	978.264.008
16	Noble Argentina SA	885.336.441
17	Cargil SACel	843.127.559
18	Shell Cia Argentina de Petroleo SA	825.354.522
19	Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda.	764.527.127
20	Ford Argentina SCA	662.461.973

Fuente: Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina. Citado en Giarracca y Teubal 2010.

4. La historia del Grupo Clarín

El diario *Clarín* fue fundado por el estanciero Roberto Noble el 28 de Agosto de 1945. Concebido en formato *tabloide*, propuso un particular modo de tratamiento de las noticias que lo ubicó en una posición de liderazgo.

Desde sus orígenes estuvo vinculado al poder político. En 1951, el gobierno peronista (1945 – 1953) decidió expropiar el diario *La Prensa*, líder en el mercado, y entregarlo a la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta situación benefició a *Clarín* que capturó muchos de los avisos clasificados y lectores de ese medio. Durante el desarrollismo, sus vinculaciones con el gobierno de Arturo Frondizi (1958 – 1962) devinieron en créditos blandos que permitieron la

consolidación del diario como periódico nacional (Albornoz, Hernández, Mastrini y Postolsky, 2000, p. 181).

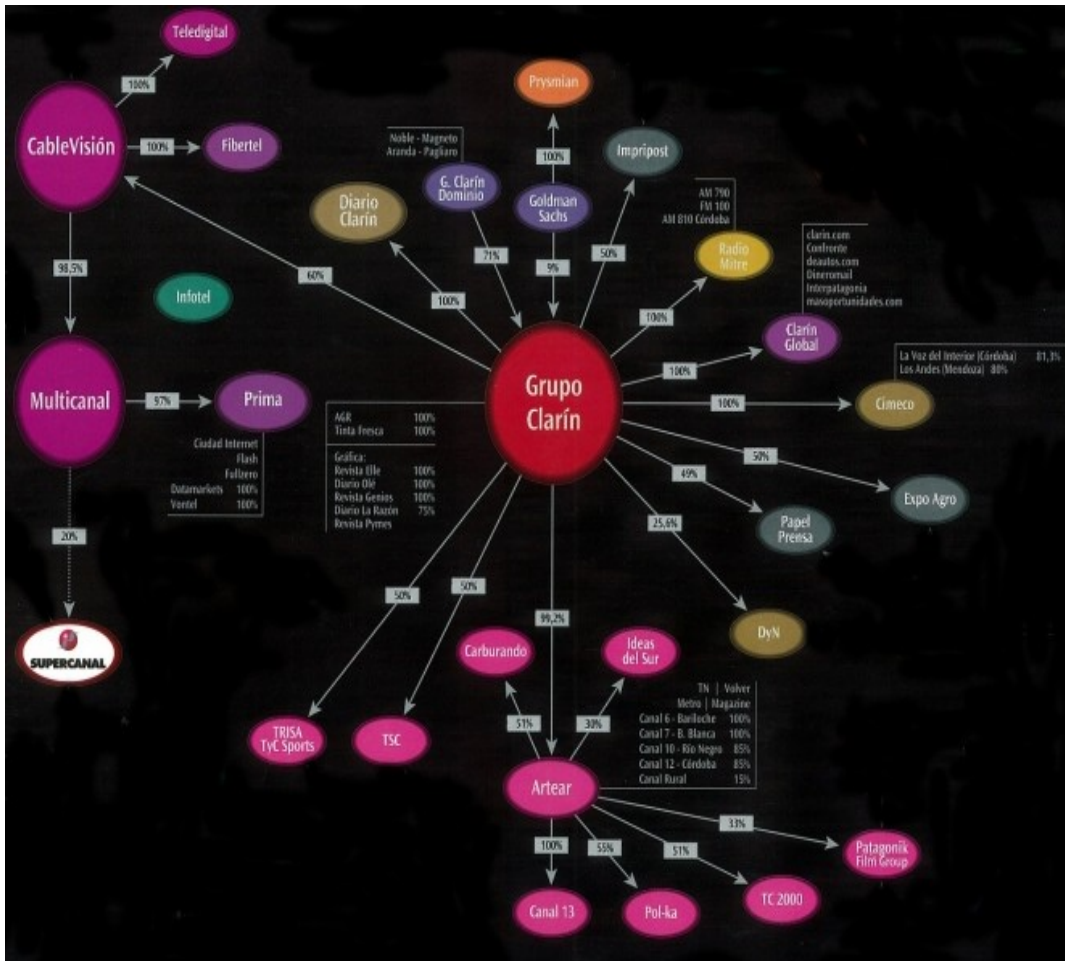
Durante la última dictadura militar (1976 – 1983), *Clarín* se asoció con *La Nación*, *La Razón* y el Estado Nacional en la empresa monopólica de papel para diarios, Papel Prensa. La adquisición de dichas acciones es actualmente investigada por la Justicia argentina, donde se procura desentrañar si Lidia Papaleo, la viuda de David Graiver, el último dueño de Papel Prensa, fue obligada a desprenderse de sus acciones en esta empresa, en una reunión de la que participó en las oficinas del diario *La Nación* (Gasparini, 2007), meses antes de ser “detenida-desaparecida” por los militares.

De hecho, la adquisición de las acciones de Papel Prensa por parte de estas tres empresas periodísticas fue pagada con préstamos otorgados por el gobierno de facto, “a cambio de aceptar la férrea censura impuesta por el gobierno de Videla” (Albornoz *et al.*, 2000, p. 187). De este modo se sentaban las bases para la expansión del grupo. En la actualidad, posee el 49% de las acciones, situación que le permite desempeñar un rol estratégico en el mercado de la prensa gráfica.

En la década del '80, el *Clarín* se expandió hacia otras ramas de la industria cultural. Pese al impedimento de las normas vigentes, adquirió Radio Mitre, una de las emisoras de mayor audiencia de la Buenos Aires (Mastrini y Becerra, 2006).

En 1989, bajo las presiones del Grupo, el gobierno de Raúl Alfonsín (1983 – 1989) logró instalar como “cuestión de Estado la necesidad de privatizar los medios” (Baranchuk, 2009, p. 219). Con la modificación del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión N° 22.285, dictada por la dictadura militar en 1980, *Clarín* logró obtener la licencia de Canal 13 de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de estas adquisiciones y hasta la actualidad, el Grupo desarrolló una lógica expansiva que lo convirtió en el principal multimedios de Argentina (ver Imagen 1).

Imagen 1: Conformación del Grupo Clarín.



Fuente: Convergencia Telemática, 2009.

Desde su fundación, *Clarín* ha tenido una fuerte influencia en las decisiones de los poderes de turno, gracias —en parte— a su gran nivel de tirada (Ulanovsky, 1997). “Es el principal diario argentino y el de mayor circulación en el mundo de habla hispana” (Albornoz, 2006, p. 124), con un promedio de 289.144 ejemplares de lunes a sábado, y de 597.404 los días domingo⁴.

La relación del Grupo con el poder político fue constante a través de los años. Desde la última dictadura militar hasta los años '90, Clarín encaró una política expansiva basada en el endeudamiento externo que lo tuvo muchas veces al borde del colapso financiero. En 2002, con la devaluación de la moneda nacional y una deuda que ascendía a los 57 millones de dólares, el multimedio estuvo al borde de la cesación de pagos. Sin embargo, a través del *lobby* consiguió que el gobierno de Eduardo Duhalde (2002 – 2003) convirtiera a pesos argentinos el valor nominal de los compromisos contraídos en dólares con la banca local.

⁴ Fuente: Instituto Verificador de Circulaciones (IVC). Promedio de circulación enero – marzo de 2011.

En 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se sancionó la ley de “Preservación de Patrimonios Culturales”, conocida como “Ley Clarín”, por la cual se restringió la participación del capital extranjero a un 30% del capital accionario.

En los últimos años, la diversificación de sus inversiones se orientó hacia sectores externos a las industrias culturales. Desde 2007, *Clarín* y *La Nación* se asociaron en Expoagro, la muestra a campo abierto más importante del país (Giarraca y Teubal, 2010).

En definitiva, los rasgos centrales del proceso expansivo del grupo Clarín ponen de manifiesto la implementación por parte de diversos gobiernos —sobre todo, a partir de la última dictadura militar— de un entramado legal que funcionó como cobertura frente a la insolvencia de la lógica expansiva desarrollada por *Clarín* (Aruguete, 2009).

En función de lo descripto hasta aquí, cabe resumir la relevancia de elegir este periódico para el estudio que aquí se presenta. En primer lugar, el diario acapara el 31% de la circulación de periódicos del país. En segundo lugar, integra el principal multimedios de Argentina, lo que “robustece su centralidad a la hora de erigirse como referencia para la construcción de la agenda pública y mediática” (Becerra y Mastrini, 2009, p.65). En efecto, su oferta noticiosa da contenido a cerca del 70% de los informativos radiales y televisivos a nivel nacional (Amadeo, 1999). Por último, los intereses comerciales del grupo en el sector agropecuario constituyen un factor más que significativo para el análisis de la cobertura informativa del conflicto campo - gobierno.

5. Método

La presente investigación se apoya en la técnica del análisis de contenido, un procedimiento metodológico que permite al analista “formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” (Krippendorff, 1990, p. 29).

Para realizar el trabajo empírico, en primera instancia fueron considerados como unidad de análisis los artículos publicados en el cuerpo principal de la edición impresa del diario *Clarín*, referidos a lo que aquí se denominó “conflicto campo – gobierno”, entre el 12 de marzo y el 17 de julio de 2008. Con el relevamiento de estos datos quedó conformado un universo de análisis de 1488 artículos.

A partir de la población obtenida en esta primera instancia se creó una muestra, integrada por 500 artículos, a los efectos de llevar el corpus a una dimensión abordable. Para la conformación de la muestra se estableció un margen de error de 3,5%.

Posteriormente, se elaboró un libro de códigos donde se definieron las variables de análisis.

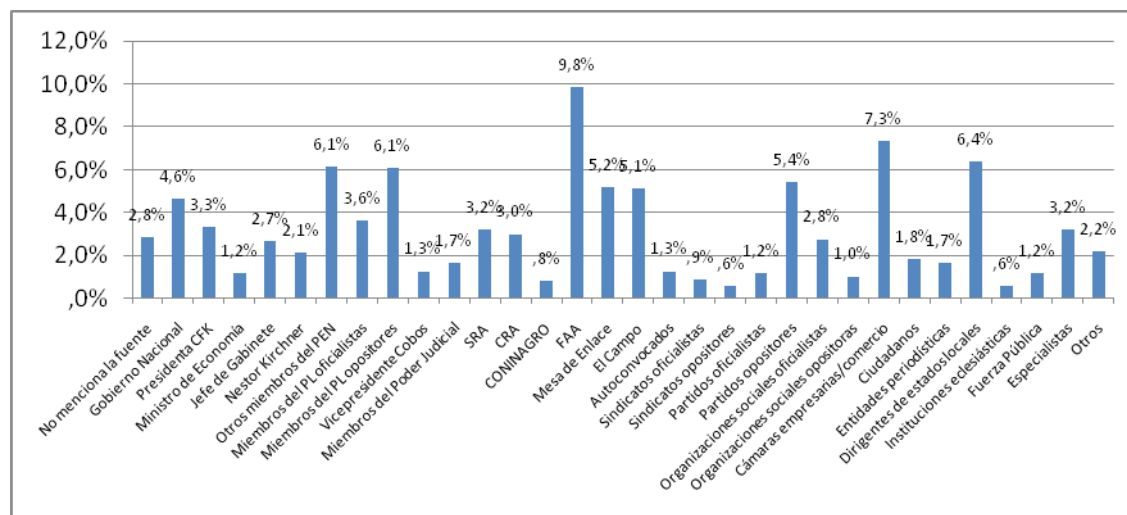
Para el análisis de las fuentes de información⁵, se computaron los actores involucrados en el conflicto que fueron citados como fuentes. Se computaron las primeras cinco menciones y su pertenencia y encuadre institucional.

6. Análisis de los diarios

Los resultados del análisis de contenido demuestran la existencia de una aceptable diversidad de fuentes de información en la cobertura mediática del conflicto “Campo – Gobierno” en *Clarín*. Sin embargo, dicha diversidad posee límites.

Una de las reglas de la teoría del *Indexing* consiste en que las diferentes “fuentes y puntos de vista son indexadas (admitidas en las coberturas mediáticas), según la magnitud y el contenido de los conflictos, entre los tomadores de decisiones clave de los gobiernos y otros actores con el poder de afectar el desarrollo de una historia” (Bennet, 1996, p. 377). Es decir, no todas las voces tienen posibilidades idénticas de dar su versión de los hechos en las coberturas informativas. Frecuentemente, logran imponerse aquellas fuentes más vinculadas a los sectores oficiales y a aquellos actores que poseen el suficiente poder y cercanía con los medios como para incidir en sus coberturas informativas.

Cuadro N° 2: porcentajes de aparición de fuentes de información. *Clarín*, Marzo – Julio de 2008.



Entre la diversidad de voces admitida por los medios de comunicación, la información aportada por las fuentes oficiales⁶ suele ocupar una gran parte de las agendas de los medios, dado el factor de autoridad que exhiben. Los periodistas descansan en los datos proporcionados por los actores

⁵ La operacionalización de las fuentes de información fue construida tomando como referencia los trabajos de Amadeo (1999) y Aruguete (2009).

⁶ Las fuentes oficiales son aquellos funcionarios o instituciones pertenecientes al ámbito estatal o gubernamental (Steele, 1997).

insertos en instituciones pertenecientes a ámbitos estatales o de autoridad, a quienes se reserva la primera y la última palabra en los reportes noticiosos (Bennett, 1983). De tal recurrencia a este tipo de fuentes resulta que la versión “oficial” de los hechos se vuelve más legítima al cubrir un acontecimiento.

En el caso bajo análisis las fuentes oficiales no tuvieron el mayor grado de participación.

Cuadro N°3: porcentajes de tipos de fuente.

Clarín, Marzo – Julio 2008.

Tipo de fuente	Porcentajes
Oficial	38,2%
No oficial	61,8%
Total	100,0%

En este contexto, es imprescindible analizar el encuadre institucional de las fuentes relevadas. En el análisis se parte de la premisa de que la posibilidad de aparición de las fuentes “no oficiales” depende del grado de encuadre institucional de las mismas (Bennet, 1996). En efecto, las fuentes “no oficiales” que prevalecieron en la cobertura de *Clarín* fueron principalmente las corporaciones del agro (en suma, acaparan el 27,1% de las menciones totales). Por su parte, las cámaras empresarias, frecuentemente consultadas en relación con las situaciones de desabastecimiento, alcanzaron un alto poder de incidencia (7,3%). Finalmente, los partidos políticos fueron incluidos con una frecuencia de cobertura del 6,6% (aunque los porcentajes fueron muy dispares según se tratara de partidos “oficialistas” u “opositores”). Los porcentajes de aparición que ostentan estos sectores corporativos con gran poder de incidencia en los medios de comunicación contrasta con la baja frecuencia de aparición de las organizaciones de la sociedad civil (sindicatos, organizaciones sociales o ciudadanos comunes) cuya incidencia en la cobertura fue exigua.

Desde una mirada desagregada, los dos sectores que protagonizaron el conflicto refuerzan la tendencia anterior, en la que el gobierno tuvo una menor incidencia que los dirigentes del campo. Así lo demuestra el cuadro N°4. Si se suman los porcentajes de aparición de todas las fuentes relevadas vinculadas directamente al gobierno nacional y se las compara con las fuentes asociadas al “campo”. El acceso del primer grupo a la cobertura de *Clarín* fue sustancialmente menor que el del segundo.

Cuadro N°4. Porcentaje de aparición de fuentes por sector. Clarín, Marzo – Julio de 2008.

Fuente	Porcentaje
"gobierno"	22,8...%
"Campo"	28,4...%

La cercanía al poder

constituye otro de los factores que posibilita a las fuentes el acceso a las coberturas mediáticas. Entre las fuentes “no oficiales” incluidas por *Clarín* se destacan los partidos políticos que acompañaron la medida del gobierno y los que la rechazaron.

Este conflicto, potenció las diferencias entre los distintos partidos políticos, que se alinearon a los actores en conflicto. Así, los partidos que aquí denominamos oficialistas y que respaldaron la política del gobierno, tuvieron frecuencias de apariciones apariciones como fuentes de información del 1,7% mientras que los partidos “opositos alcanzaron el 5,4%.

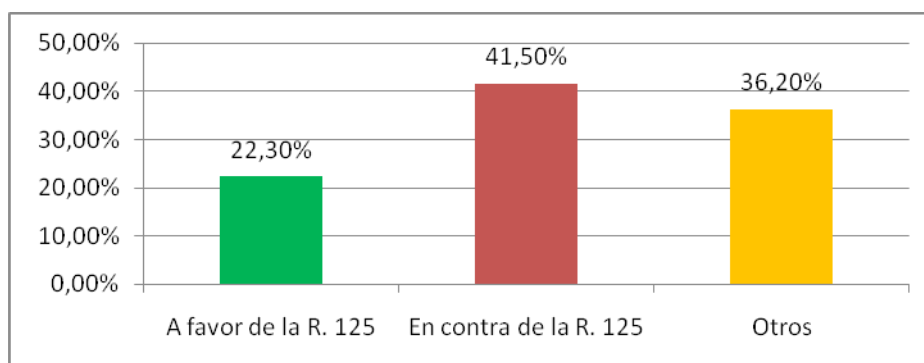
En este sentido “la presencia del conflicto agrario de 2008 marcó el escenario electoral de 2009, en parte porque permeó todo el espectro político partidario durante el año anterior pero también por la recurrente capacidad de *lobby* de las entidades agrarias” (Castro García, Comelli y Palmisano, 2009, p.298)

Esta diferencia entre partidos políticos tuvo correlación con las fuentes “oficiales” parlamentarias donde también las declaraciones de los legisladores opositores (6,1%) duplicaron a las oficialistas (3,6%)

Por otro lado, el comportamiento que revierte esta tendencia se expresa en ciertos sectores de la sociedad civil, dado que entre las organizaciones sociales predominaron las que apoyaron la medida. Uno de los factores explicativos de esta situación radica en que el gobierno nacional mantiene vinculaciones con numerosas organizaciones sociales que se manifestaron públicamente a favor de la Resolución N° 125. Por su parte, exceptuando a algunos sectores de la izquierda más radical, la mayoría de los partidos políticos de la oposición con representatividad institucional no poseen relaciones directas con organizaciones sociales estables con capacidad de convocatoria y movilización.

Por último, si se tienen en cuenta en forma agregada los posicionamientos con respecto a la Resolución 125 de las diferentes fuentes que fueron incluidas en el tratamiento informativo se llega a las siguientes cifras:

Cuadro N°5. Posicionamiento de las fuentes con respecto a la Resolución N° 125. Clarín, Marzo – Julio de 2008.



La conclusión principal de este trabajo es que la mayoría de las fuentes incluidas por *Clarín* en el tratamiento noticioso de la Resolución N°125 provinieron de sectores que estuvieron explícitamente en contra de la norma (41,5%). La suma de las fuentes consultadas provenientes de espacios que se manifestaron a favor de la norma apenas alcanzaron la mitad que las primeras (22,3%). Es decir, lo que al comienzo de la indagación empírica aparecía como una interesante diversidad de voces en la cobertura mediática finalmente estuvo circunscripto a un predominio de fuentes no oficiales representantes de sectores altamente institucionalizados y con gran poder de penetración en la agenda mediática que tuvieron una posición contraria a la aplicación de la Resolución N° 125. Este posicionamiento fue congruente con las afirmaciones y argumentaciones del propio grupo mediático en los editoriales o notas de opinión que fueron publicadas durante los 124 días de conflicto.

7. Conclusiones

La teoría del *Indexing* estipula que en las coberturas informativas suele existir un predominio de fuentes oficiales por sobre las no oficiales (Bennet, 1990). La aparición de diferentes voces en los medios de comunicación es el resultado de una disputa en la que actores diversos compiten por brindar su versión de los hechos. El predominio de las fuentes estatales corroborado en numerosos casos de análisis empírico se fundamenta en dos cuestiones centrales.

Por un lado existiría una “comunidad de intereses” entre los gobiernos nacionales y los conglomerados mediáticos en el que los primeros suelen garantizar un buen “clima de negocios”

para ambos. Por el otro las rutinas de producción de las noticias, en el marco de esos intereses comunes, producen relaciones “simbióticas” entre periodistas y fuentes oficiales (Bennet, 1990) en las que ambas partes se benefician. Mientras que las “fuentes” se aseguran penetrar en la agenda informativa, los periodistas acceden a informaciones que constituyen insumos básicos de su labor.

Sin embargo, el caso bajo estudio mostró un comportamiento diferente a lo que estipula la teoría del *Indexing*. En la cobertura mediática del diario *Clarín* sobre la implementación de la Resolución 125 las fuentes no oficiales prevalecieron por sobre la oficiales. Frente a esta comprobación empírica es posible subrayar dos cuestiones centrales.

En primer lugar, las fuentes que accedieron con altos niveles de importancia en la cobertura mediática representaron a sectores fuertemente institucionalizados y, tal como fueron caracterizados en el marco histórico del presente artículo, con una gran capacidad de influencia en los diferentes gobiernos de la historia del país y en los medios de comunicación.

En segundo lugar, de acuerdo a las características particulares del conflicto, se puede inferir que la diferencia central con respecto a otros trabajos que corroboraron la hipótesis del *Indexing* fue que los sectores que garantizaban la estabilidad de cierto “clima de negocios” en este caso no fueron justamente los sectores oficiales, sino las entidades del agro y los partidos políticos opositores a la norma.

En efecto, tal como se ha descripto en el análisis, la Resolución 125 de retenciones móviles a las exportaciones de granos afectó intereses directos del Grupo Clarín. Su incursión en el agronegocio a través de Expoagro y la estrecha relación del Grupo con las principales firmas que concentran la actividad rural en Argentina orientaron la cobertura mediática del conflicto.

En este contexto, el predominio de voces representantes de los intereses del “campo” en la cobertura responde, tal como lo plantea Bennet (1990), a la existencia de intereses comunes y simbióticos entre el medio y esos sectores. La inclusión de dichas perspectivas fue coherente con la intención de la reproducción de un *Statu Quo* coherente con las necesidades del Grupo mediático. La diferencia central que marca este trabajo con otros que han puesto a prueba la hipótesis del *Indexing* es que en este caso en particular las políticas impositivas promovidas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner constituyeron mucho más una amenaza que una garantía para las necesidades de Clarín.

Si bien en el caso bajo estudio existió una diversidad de voces interesante, la misma no fue producto de una democratización del acceso a la cobertura del diario más importante de Argentina. Por el contrario, las fuentes no oficiales incluídas correspondieron mayoritariamente a los representantes de las asociaciones del agro, altamente institucionalizadas y con una histórica capacidad de influencia en los medios de comunicación. En este contexto, la aparición de sectores de la sociedad civil o de ciudadanos comunes fue muy marginal.

En un conflicto que estuvo caracterizado por el enfrentamiento entre dos sectores con posiciones dicotómicas (Becerra y López, 2009), los intereses del multimedio fueron mucho más acordes a los pronunciamientos de la Mesa de Enlace y ciertos sectores no oficialistas que a los de las fuentes gubernamentales. De ahí que la versión de los hechos predominante en la cobertura informativa del diario *Clarín* haya sido concordante con las versiones de las fuentes más citadas, pertenecientes a las organizaciones del agro y contrarias a la implementación de la norma.

8. Referencias Bibliográficas

- Albornoz, L. A. (2006). *Periodismo Digital. Los grandes diarios en la red*. Buenos Aires: La Crujía.
- Albornoz, L. A., Hernández, P., Mastrini, G. y Postolski, G. (2000). Al fin solos: el nuevo escenario de las comunicaciones en la Argentina. En L. A. Albornoz (Coord.), *Al fin solos... La nueva televisión del Mercosur* (pp. 181-215). Buenos Aires: Ciccus/La Crujía.
- Amadeo, B. (1999). *La aplicación de la teoría del framing a la cobertura de la corrupción política en Argentina (1991-1996)*. Tesis doctoral no publicada, Universidad de Navarra, Facultad de Comunicación, Pamplona, España.
- Aruguete, N. (2009). *Los medios y la privatización de Entel. El tratamiento noticioso del servicio telefónico argentino antes y después de su transferencia (agosto de 1990 – enero de 1991). Un estudio exploratorio*. Tesis de doctorado no publicada. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina.
- Bagdikian, B. H. (1985). The U.S. Media: Supermarket or Assembly Line? *Journal of Communication*, 35(3), 97-109.
- Baranchuk, M. (2009). Canales 11 y 13: la primera privatización de la década menemista. En G. Mastrini (Ed.), *Mucho ruido, pocas leyes. Economía y políticas de comunicación en la Argentina (1920-2007)* (pp. 215-238). Buenos Aires: La Crujía, 2º Edición ampliada.
- Barsky, O y Gelman, J. (2009). *Historia del Agro Argentino. Desde la conquista hasta comienzos del siglo XXI*. Buenos Aires: Sudamericana.

- Basualdo, E y Arceo, N. (2009). *Características estructurales y alianzas sociales en el conflicto por las retenciones móvil*, en Arceo, E, Basualdo, E y Arceo, N. (2009). *La crisis mundial y el conflicto del agro*. Buenos Aires: Editorial La Página.
- Becerra, M y López, S. (2009). La contienda mediática. Temas, fuentes y actores en la prensa por el conflicto entre el gobierno y las entidades del campo argentino en 2008. *Revista de Ciencias Sociales. Segunda época. 16*. 9-30 Bernal: Universidad Nacional de Quilmes Editorial.
- Becerra, M. y Mastrini, G. (2009). *Los dueños de la palabra. Acceso, estructura y concentración de los medios en la América Latina del siglo XXI*. Buenos Aires: Prometeo.
- Bennett, W. L. (1983). *News. The Politics of Illusion*. Nueva York: Longman.
- Bennett, W. L. (1990). Toward a Theory of Press-State Relations in the United States. *Journal of Communication, 48*(2), 103-127.
- Bennett, W. L. (1996). An Introduction to Journalism Norms and Representation of Politics. *Political Communication, 13*, 373-384.
- Castro García, C.; Comelli, M.; Palmisano, T. (2010). *Los usos del conflicto: la influencia de la Mesa de Enlace en el escenario electoral de 2009* En Giarracca y Teubal (Eds.) (2010). *Del paro agrario a las elecciones de 2009. Tramas, reflexiones y debates*. Buenos Aires: Editorial Antropofagia.
- Crouse, T. (1973). *The Boys on the Bus*. Nueva York: Random House.
- Flichman, G. (1977). *La renta del suelo y el desarrollo agrario argentino*. Mexico: Siglo XXI Editores.
- Gasparini, J. (1990). *El crimen de Graiver*. Buenos Aires: Ediciones Grupo Zeta.
- Giarracca, N. (2010). *El conflicto agrario 2008 – 2009: los debates necesarios*. En Giarracca N. y Teubal, M. (Eds.) (2010). *Del paro agrario a las elecciones de 2009. Tramas, reflexiones y debates*. Buenos Aires: Editorial Antropofagia.
- Giarracca, N. y Teubal, M. (2010). *Del paro agrario a las elecciones de 2009. Tramas, reflexiones y debates*. Buenos Aires: Editorial Antropofagia.
- Gitlin, T. (1980). *The Whole World is Watching. Mass media in the making and unmaking of the new left*. Berkeley: University of California Press.
- Hallin, D. C. Manoff, R. K. y Weddle, J. K. (1993). Sourcing patterns of national security reporters. *Journalism Quarterly, 79*(4), 753-766.
- Krippendorff, K. (1990). *Metodología del análisis de contenido*. Barcelona: Paidós Comunicación.
- Martini, S. (2000). *Periodismo, noticia y noticiabilidad*. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.

- Mastrini, G. y Becerra, M. (2006). *Periodistas y magnates. Estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina*. Buenos Aires: IPYS, Prometeo.
- McQuail, D. (1998). *La acción de los medios*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Murmis, M y Portantiero, J.C. (1986). *Estudios sobre los orígenes del peronismo*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Steele, J. E. (1997). Don't Ask, Don't Tell, Don't Explain: Unofficial Sources and Television Coverage of the Dispute over Gays in the Military. *Political Communication*, 14, 83-96.
- Tuchman, G. (1972). Objectivity as Strategic Ritual: An Examination of Newsmen's Notions of Objectivity. *American Journal of Sociology*, 77(4), 660-79.
- Ulanovsky, C. (1997). *Parén las rotativas. Historia de los grandes diarios, revistas y periodistas argentinos*. Buenos Aires: Compañía Editora Espasa Calpe Argentina.
- VanSlyke Turk, J. (1986). Public Relations' Influence on the News. *Newspaper Research Journal*, 7(4), 15-27.
- Wolf, M. (1991). *La investigación de la comunicación de masas*. Buenos Aires: Paidós.